

presente caso, porque los individuos que la componen, saben perfectamente bien el espíritu que tuvo el legislador al sancionar el artículo 49 de la ley adicional, pues todos concurrieron con su voto á su sancion. Ya he bosquejado ligeramente los hechos que dieron lugar á su aceptacion, y en virtud de ellos es fácil conocer su espíritu, y fijar su verdadero sentido, recordando su historia, como lo he hecho.

Tambien he dicho, al contestar al señor Chavez, que el artículo 49 de la ley adicional, ha derogado absolutamente el 14 de la ley eleccionaria del 61, y ademas, suspendia los efectos del artículo 69 es decir, que mientras el Congreso no designe el número de electores para cada Provincia, es un deber de los pueblos sujetarse al censo del 53. Buena, ó mala esta ley hay que cumplirla, sin buscar interpretacion, porque el sentido es claro, y porque si aceptáramos diferente principio del que propone la Comision especial, no habria ley posible en el mundo, por que á título de llamarla interpretable, habria que suspender sus efectos hasta la reunion del Congreso.

Siendo, pues, claro el espíritu de la Ley, y conocido su sentido, creo que no me he equivocado al pedir su cumplimiento, puesto que de ese modo nos evitaremos el trabajo de hacer repetidas representaciones por la infraccion. Comprendo bien, que el H. señor Cárdenas ha rebatido mi dictámen con argumentos que atacan la forma, pero no la esencia; es decir, que por no haber llegado el caso de infringirse la ley, la Comision debe abstenerse de tomar la medida que se indica en el dictámen. Pueden ser buenos los argumentos, pero, no siempre conviene sacrificar la esencia de negocios tan graves, como el presente, á meras formalidades. Yo tuve el honor de sostener estos mismos principios en el Senado, cuando se discutió la ley, y no puedo abdicar de ellos. Vosotros resolveréis lo que sea mas justo.

El señor Cardenas.

Advertiré que no he entrado en la cuestion legal eleccionaria, sino simplemente en la cuestion de competencia de este cuerpo para absolver consultas; é insisto en decir que es incompetente, para resolver consultas, para aplicar las leyes y mucho mas todavía para dirigirse á un síndico *previniéndole ó ordenándole* que las cumpla en tal ó cual sentido, como aparece del tenor literal del dictámen, en el que previniendo lo que se debe comprender, se ordena, se manda que se cumpla la ley en ese mismo sentido en que la entiende el señor Lizarraga. Al Gobierno toca hacer efectivo su cumplimiento; la Constitucion le encarga cumplir y hacer cumplir las leyes, y todas ellas en la forma de la promulgacion llevan el mandato del Gobierno supremo de que se cumplan. ¿Para qué pues este nuevo mandato que se propone en el dictámen?

Repito que para mí nada importa ahora la cuestion legal, sino la cuestion constitucional de competencia. ¿Donde está el artículo de la Constitucion que nos permite absolver consultas? Llamó seriamente la atencion de mis compañeros sobre el particular, no por lo que valga la cuestion presente, sino por el precedente que se establecería.

Por primera vez se trata de absolver aquí consultas; y si las absolvemos, hoy abrimos una puerta muy ancha por la cual nos perderemos con frecuencia separandonos del sendero constitucional.

El señor Chavez.

Si mal no he oído, el señor Lizarraga ha opinado que está derogado el artículo 14 de la ley de elecciones. Yo creo que no, porque este artículo dice [leyó]. De ninguna manera pues puede quedar derogado este artículo, porque tanto por el censo de 53 como por el nuevo, toca al Presidente de la mesa designar el número de electores que se van á nombrar, porque de lo contrario cada sufragante haría su lista caprichosa y nombraría uno, seis ó mas electores.

El señor Presidente propuso que se votaría por partes. Consultado esto, la Comision resolvió que se votase por entero.

Se cerró en seguida el debate; y se desechó el dictámen; despues de lo cual se levantó la sesion.

COMISION PERMANENTE.

Sesion del 28 de Setiembre.

Presidencia del señor Delgado.

Abierta la sesion, á las dos de la tarde, con 10 señores, se leyó y aprobó el acta de la anterior.

Se dió cuenta de los siguientes documentos.

1º. De una nota del señor Ministro de Justicia, solicitando que la comision permita que el señor Chavez siga el juicio promovido ante el señor Paredes, por el diputado de los valles de la Magdalena, Maranga y la Legua, sobre prorratas extraordinarias correspondientes á los fondos pertenecientes al señor Chavez.—Se concedió el permiso estando llano el señor Chavez.

2º. De una nota del alcalde municipal de la provincia de Cauta, pidiendo que la comision resuelva sobre la pretencion de los señores Estrada, Moscoso, Alosilla, Rodriguez, Campana y Montalvo, que, sin derecho, quieren funcionar en la Municipalidad cesante de dicha provincia, que el Prefecto del departamento ha puesto en el ejercicio de las funciones municipales, despues de haber suspendido de ellas á la que antes funcionaba.—Pasó á la comision del señor Rosas.

3º. De una nota del señor diputado por la provincia de Urubamba, Dr. Luna, avisando que ha tomado posesion de la Vocalía de la Corte del Cuzco, que se le confirió; y que en consecuencia, no se le consideren en el presupuesto de la comision las dietas que le correspondian, como á Diputado con licencia.

4º. De un recurso de los síndicos municipales de la provincia de Chota, quejandose de que el alcalde de la Municipalidad ha ocultado el pliego en blanco que remitió la comision.—Pasó á la comision del señor Chavez.

5º. De los dictámenes que en seguida fueron puestos en debate.

ORDEN DEL DIA.

El siguiente dictámen fué aprobado sin debate.

Señor.

Corresponde exclusivamente á las Camaras pasar al Ejecutivo, antes de cerrar sus sesiones ordinarias, el cuadro de los representantes que deben ser reemplazados por haber cesado en el ejercicio de su cargo. En esta virtud la Comision Permanente, sin abrogarse facultades que no le pertenecen, no puede acceder á lo que solicitan los sindicos de la provincia de Chota.

Por tales razones el que suscribe es de opinion que declareis sin lugar la solicitud de los expresados sindicos.

Lima, Setiembre 4 de 1863.

Manuel Arenas.

Se puso en discusion el siguiente dictámen.

Señor.

El alcalde de la Municipalidad de Chota se dirijió en 12 de Agosto último á este cuerpo pidiendo la aclaracion del artículo 4.º adicional á la ley orgánica de elecciones, por creer que su disposicion contenia una verdadera oscuridad; y en la sesion de 10 del corriente tuvisteis á bien desechar el informe que proponia "se contestase á dicho alcalde con su trascripcion para su inteligencia & 3 ordenando, en su consecuencia, se expidiese el nuevo informe que tengo el honor de someter á vuestro conocimiento.

La Comision Permanente del cuerpo legislativo tiene la principal é importante atribucion de vijilar el cumplimiento de la Constitucion y de las leyes; y en ejercicio de ella puede y debe dictar las resoluciones que sean conducentes á tan importante fin; y como la Municipalidad de Chota se manifiesta, si no dispuesta á quebrantar las leyes vigentes en materia de elecciones, al menos vacilante acerca de su estricto cumplimiento, y por lo mismo propensa á infringir la que determina el número de electores que debe dar cada distrito; parece que la comision legislativa se halla en el caso preciso de dictar dentro la esfera de sus atribuciones, la resolucion que impida el quebrantamiento de la ley, ejerciendo asi una de sus peculiares y mas preciosas funciones.

El artículo 4.º de la ley adicional dispone: "que el número de electores que debe dar cada provincia se determinará por el Congreso luego que se pase el censo de la república; y mientras tanto las parroquias no podrán aumentar el número de electores que en el año de 1853 se hallaban en posesion de dar. Esta disposicion clara, espresa y terminante, que no contiene oscuridad de ninguna especie y que por ser la última que se ha promulgado sobre la materia, es la única á que debe uniformar sus procedimientos electorales de todos los distritos de la República respecto al número de electores, que no puede ser mayor que el del año 53, bajo de la pena de nulidad que ella misma establece.

Si hubiese duda ó oscuridad en las palabras ó en el sentido del citado artículo 4.º, no seria por cierto la comision legislativa la que pudiese hacer la interpretacion que, por el artículo 59 de la Constitucion, corresponde solo al Congreso; pero como aquel es por demas claro y no debe ser quebranta-

do bajo de pretesto alguno, el que suscribe opina que se conteste al Alcalde Municipal de Chota:

Que no siendo oscuro el artículo 4.º de la ley adicional, debe observarse lo que el dispone respecto al número de electores; y que en el caso de que existiera la oscuridad supuesta, la Comision Permanente no podia hacer la aclaracion solicitada, por no ser esta atribucion de su competencia sino de las Cámaras Legislativas.

Dése cuenta — Lima 23 de Setiembre de 1863.

Manuel Pino.

El señor Cardenas.

Me permitiré hacer una observacion. Este es el mismo dictámen desechado, que se presenta bajo distinta forma. En el dictámen del H. señor Lizarraga se opinaba se dijese al sindico recurrente, que cumpliera la ley como la interpretaba su Señoría, siendo así que la atribucion de mandar cumplir las leyes, corresponde al Poder Ejecutivo; y en este se manda exactamente lo mismo.

El señor Lizarraga.

Está visto que el segundo dictámen espedido en la consulta del alcalde de Chota es el mismo, en la esencia, del que yo espedí, y que fué desechado: no me conviene inculcar sobre lo mismo: solo sí, me permitiré deshacer una equivocacion del H. señor Cardenas.—Yo no he interpretado la ley en mi dictámen, ni he dicho nunca q' ha habido lugar á interpretacion.—Al contrario yo he dicho, que la ley es clara, y que por lo mismo, debe prescribirse su cumplimiento.—Con esta aclaracion puede aceptarse lo que indica el señor Cardenas.

El señor Pino.

Creo que la comision al aprobar este informe no infrinje ninguna de sus atribuciones, sino que por el contrario, dá cumplimiento á la que le encomienda vijilar el cumplimiento de las leyes.

La Municipalidad de Chota cree que ofrece dudas el artículo 4.º, y que es oscuro su sentido; mas cualquiera conocerá q' no existe esa oscuridad, que el artículo es claro y terminante. La Comision Permanente debe decir que ese artículo es claro; y al decir esto no hará mas que declarar una verdad é impedir que esa Municipalidad se desvie del cumplimiento de la ley. He aquí que, de un modo indirecto, la Comision Permanente al hacer esa aclaracion, hace uso de una de sus atribuciones, la de impedir que se infrinjan las leyes. Si, por el contrario no dijese nada, entónces con su silencio contribuiría á que la Municipalidad infrinjiese la ley; y de ese modo seria responsable hasta cierto punto de la infraccion. No veo, pues, que al aprobarse este informe, la Comision Permanente usurpe atribuciones que no le corresponden; y, segun la Constitucion, nadie está obligado á hacer lo que no manda la ley, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe; de manera que no hay un artículo constitucional que nos impida hacer esta aclaracion. Bien puede pues hacer la comision la aclaracion que aparece en el dictámen.

El señor Cardenas.

El principio constitucional de que nadie está obligado á hacer lo que no manda la ley, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe, es aplicable únicamente á las garantías de los ciudadanos y no á las atribuciones de los poderes. Los poderes públicos no tienen ni mas ni menos atribuciones que las es-

presamente detalladas en la ley: la que ella no concede, no puede ejercerse; por consiguiente, si entre nuestras atribuciones no está comprendida la demandar cumplir las leyes, no podemos ordenar su cumplimiento; y que no está comprendida, es un hecho; y que no puede estarlo, también lo es, por que la Constitución confirió al Gobierno esa atribución de mandar cumplir las leyes; y por eso, como dije antes de ahora, las leyes llevan la fórmula en la promulgación de "*publíquese y circúlese y dese le el debido cumplimiento.*"

Con respecto al síndico recurrente, él no ha manifestado intención de infringir la ley; y aunque la hubiera manifestado, la intención de infringir la ley no es bastante para que nosotros ejerzamos nuestra atribución constitucional. No obstante, en el informe se manda cumplir la ley, como lo pueden ver los señores con solo oír leer el último parrafo (se leyó).

El señor Pino.

Se me permitirá hacer una aclaración. No se dice que hay oscuridad en el artículo 4.º adicional, sino una contradicción entre él y el 6.º de la ley. El artículo 6.º determina que cada pueblo, aunque no tenga 250 habitantes, podrá elegir un elector; y el artículo 4.º, como se ha repetido en la discusión anterior, dispone que mientras no se apruebe el censo, todas las provincias elegirán el mismo número de electores que eligieron el año 53: esta disposición ha suspendido la anterior; de manera que el número de electores de cada provincia no debe corresponder ya al número de sus habitantes sino que debe ser el mismo que elegían el año 53. El alcalde municipal recurrente, ¿debe cumplir estas disposiciones, está dudoso respecto á cual de las dos dará cumplimiento; y si la Comisión Permanente guarda silencio, sino absuelve esa consulta, entonces la Municipalidad de Chota, lo mismo que todas las demás, tal vez infrinjan el artículo 4.º de la ley adicional y darán cumplimiento al artículo 6.º; y entonces resultará una infracción manifiesta de la ley, imputable al silencio que la Comisión Permanente hubiese guardado; mientras que al hacer la declaración que propone el dictámen, no quebrantará ningún artículo constitucional. Si el H. señor Cardenas tuviera la bondad de decirnos, cual es la atribución que usurpa la Comisión Permanente, entonces convendría con él en que la comisión no puede absolver la duda del alcalde de Chota. El informe dice en su parte positiva (leyó). No hace sino declarar pues una verdad que la comisión, como cualquier individuo, puede declarar, y es que no hay oscuridad en la ley, y que en el caso que exista no puede disiparla sino el Congreso.

Señor Zarate.

No puedo atribuir á otra cosa, que á la poca atención y ligereza, con que se suele juzgar las disposiciones legales, la duda que se ha suscitado sobre, la verdadera inteligencia de la ley de elecciones entre su artículo 6.º y el 4.º adicional sancionado por el último Congreso, cuando cabalmente, á mi juicio, entre una y otra disposición hay la mas perfecta armonía. El artículo 6.º de la ley orgánica prescribe que se elija un elector por cada 500 habitantes, y que todo pueblo aunque no llegue á 250 habitantes dé también un elector. Por el 4.º de la ley adicional se dice, que el Congreso lue-

go que apruebe el censo general de la República, designe el número de electores que corresponde á cada distrito; y entre tanto no se pueda elegir mas que el número de electores que daba en 1853. Resulta claramente de la comparación que, no hay oscuridad, duda ni contradicción. El artículo 6.º no hace mas que sentar la base para la elección de electores, sin determinar la autoridad que ha de hacer la designación; y el 4.º llena este último, encomienda la designación al Congreso. Me explicaré con una analogía que me suministra la Constitución. Por un artículo constitucional se dispone que por cada 30 mil habitantes se elija un Diputado, otro por cada fracción que pase de 15 mil, y que toda provincia aunque no tenga 15 mil dé también un Diputado. Después de esto dice otro artículo que la designación del número de Diputados que corresponda á cada provincia se haga por el Congreso de 1862, sin que pueda aumentarse sin orden expresa del mismo. Por sentar el uno la base y el otro señalar la autoridad que debe segun ella hacer la distribución, ¿se puede decir que se contrarian ambos artículos? parece que no. El caso de los electores es pues exactamente igual al de los Diputados.

El síndico recurrente ha creído haber contradicción entre el artículo 6.º y el 4.º y se ha dirigido á la comisión para que se le diga á cual de esas disposiciones ha de atenerse en las próximas elecciones. Propiamente hablando y segun los términos de su oficio, no ha pretendido que la comisión interprete la ley, porque aun cuando hubiese necesidad de aclarar su espíritu, de explicar su sentido, la comisión no podría hacerlo, por no ser ni poder legislativo á quien corresponde la interpretación autentica, ni Ejecutivo ó judicial á los que toca la doctrinal, como muy bien lo demostró el señor Cardenas en la sesión anterior. Entonces ¿qué es lo que ha solicitado el síndico de esta comisión? nada mas que un consejo, ha dirigido solo una consulta manifestando su duda. ¿Y no se cree capaz ni competente la comisión para desvanecer esa duda, para absolver una consulta que se le dirige? tal proceder no me parece propio ni decente, cuando no ha de ser en sentido contrario á la ley ni causar mal ó perjuicio alguno, sino mas bien evitarse desordenes que mas tarde, por falta de una oportuna resolución, pudieran ocurrir en los comicios electorales.

Pueden en muchos pueblos ó provincias abrigarse la misma duda del síndico oficiente, y como las elecciones se ajitan ahora en toda la república, creo esta cuestión de suma importancia; así como que la comisión debe resolverla no solo para prevenir ulteriores males y dar una regla fija de conducta, sino también para garantizar la honra del Congreso que con bastante tino y madurez sancionó el artículo 4.º q' ha motivado la duda. La comisión especial calificadora de las elecciones, á la que tuve el honor de pertenecer, habiendo observado anomalías arbitrarias y desordenes en las elecciones de muchas provincias, presentó el proyecto de ley adicional, que mereció la sanción del Congreso. Como casi el único medio de contener las licencias, la suplantación y falsificaciones se acordó el artículo 4.º adicional, que sin duda alguna es una gran bala que contendrá los escándalos que, con motivo del aumento de electores en muchas provincias, ha presenciado la república mas de una vez. Era muy

trillado, especialmente en pueblos algo distantes de la capital del departamento, suponer diez electores á distritos que apenas podian dar tres ó cuatro, hacer aparecer como pueblos con cuatro ó mas electores haciendas, ó pequeñas parcialidades que no podian dar uno. Haciendo el Congreso la designación, no habrá lugar á aumentos, so pena de nulidad, y se habrá estirpado el abuso y cimentado hábitos de orden y respeto á la ley.

Como se ve esa designación que haga el Congreso no es en manera alguna perjudicial á los pueblos: no es quitarles la libertad de aumentarse uno ó mas electores cuando lo exige el crecimiento del número de sus habitantes. Sabido es que el fenómeno del aumento ó disminución de una población no puede percibirse inmediatamente ni durante un bienio; para penetrarse del movimiento es menester un intermedio de diez á quince años y entonces es cuando se ve y conoce. Resultando el aumento nada sería mas fácil que hacer constar en el censo y ocurrir al Congreso, el que no podría negarlo estando comprobado el pedido.

En virtud de lo espuesto, y de lo explicado por el señor Pino en su dictámen, manifestando ser clara y terminante la ley y no dar lugar á duda ni interpretación, soy de opinión de que la comisión debe aprobar el dictámen con la modificación que me permito proponer, de que se diga en conclusion, que es infundada la consulta del síndico.

El señor Santisteban.

La primera atribucion de la Comisión Permanente es vijilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes dirijiendo al Poder Ejecutivo dos representaciones sucesivas, para que enmiende cualquier infracción que hubiera cometido, ó para que proceda contra las autoridades subalternas, si ellas hubiesen sido las infractoras. Este artículo, en mi concepto, da á la Comisión Permanente una facultad mas amplia de lo que á primera vista se cree. Lo principal es vijilar sobre la Constitución; lo accesorio, en mi concepto, el modo como en algunos casos debe ejercer su atribucion, á saber, dirijiendo representaciones al Gobierno cuando haya infracción. Si pues la Comisión Permanente tiene facultad para dirijir representaciones con el objeto de que se enmienden las infracciones, se deduce lójicamente, que tendrá tambien la de decir al Gobierno, cuando este le consulte, cual es la ley que debe observar en caso de duda. Si el Gobierno ocurre á la Comisión Permanente exponiéndole sus dudas, diciéndole no tengo ánimo de violar la ley, pero puede ser que la viole, porque no veo claro en este asunto y necesito que la Comisión Permanente diga que ley debo cumplir; yo creo que la Comisión no infringiría el artículo constitucional, si dijera esta es la ley que debéis cumplir; porque vale mas siempre prevenir la infracción que hacerla enmendar; y si tiene facultad para responder tambien debe tener para prevenir. Sin embargo, no quiero traer la cuestión á este terreno, porque, en mi concepto, ha variado de un modo sustancial de como se presentó la primera vez, porque el Gobierno la ha resuelto contestando una consulta del Prefecto de Cajamarca respecto de los electores de Celendin, pues ha dicho que el número de electores de esa provincia sea el que determina el artículo 4.º de la ley adicional á la de elecciones. Es decir que el Gobierno ha resuelto por su parte

la cuestión diciendo esta es la ley que debe cumplirse y no la otra; ha desaparecido pues toda oscuridad: los colegios electorales deben formarse con el mismo número que tuvieron en la elección el año 53: y per consiguiente ya no tenemos el deber de hacer ninguna representación, porque esta se una cuestión resuelta y resuelta de un modo aceptado indirectamente por la comisión, porque desde que no dirije representación al Ejecutivo es claro que aprueba su procedimiento, es claro tambien que debe cumplirse el artículo 4.º de la ley supletoria.

He aqui lo único que debe decirse al alcalde Municipal de Chota: que el Gobierno ha resuelto la cuestión y que la Comisión Permanente no le ha dirijido ninguna representación; lo que manifiesta que el Ejecutivo está en el camino de la ley. Creo pues que el dictámen está fuera del caso en este momento, y que debe reformarse en los términos que acabo de indicar ú otros analogos á ellos, manifestando que habiéndose resuelto este punto por el Gobierno, y no habiendosele dirijido representación ninguna por la comisión, debe cumplirse tal como lo ha resuelto el Gobierno en cumplimiento de sus atribuciones especiales. Deseo que se reforme el dictámen en estos terminos.

El señor Pino.

Tengo el sentimiento de no aceptar la indicación del H. señor Silva Santisteban, porque, si se adoptara como base la resolución tomada por el Ejecutivo, se creeria que la Comisión Permanente se habia inclinado á resolver en ese sentido por deferencia á la resolución q' ha dado el Gobierno á esta cuestión; mientras que, haciendo lo que se propone en el dictámen, la Comisión Permanente, con la facultad q' le concede su Señoría, hará esa declaración independientemente de la resolución del Gobierno. No necesita la Comisión Permanente, para hacer esas aclaraciones, fundarse en la resolución del Gobierno: el Gobierno ha podido y debido mandar cumplir esa ley, así como la Comisión Permanente puede y debe declarar que esa ley está vigente.

El señor Santisteban.

Señor, una de dos cosas ha debido ser materia de la resolución del Gobierno: ó mandar que se cumpla el artículo 6.º de la ley principal, ó mandar que se cumpla el artículo 4.º de la ley supletoria, porque el artículo 4.º excluye al 6.º. Antes de la resolución del Gobierno, convengo que estaba en su lugar cualquiera manifestación de la Comisión Permanente, aun cuando para ello hubiese sido necesario exceder, por celo del bien público, en el cumplimiento de nuestras funciones; pero una vez resuelta esta cuestión por el Gobierno, la simple manifestación de la Comisión Permanente ó tiene que ser inútil ó contradictoria. Si es conforme con la resolución del Gobierno, es de mas: si es contraria á lo que ha resuelto el Gobierno, entonces tambien está de mas, porque quiere decir que estima la resolución como infractoria de la ley, y en tal caso debe dirijir la representación al Gobierno para que enmiende la infracción. Por eso he dicho, que la cuestión ha variado de cuando se presentó la primera vez. Entonces no dijo nada el Ejecutivo; pero una vez que la ha resuelto, la comisión no tiene otra atribucion que dirijir la representación si el Gobierno ha infringido la ley, ó guardar silencio si cree que no la ha infringido. Cuando resuelto el asunto, la Comisión Permanente no puede hacer

otra cosa: cualquiera declaracion seria extemporánea, y, permitaseme la expresion, tal vez, ridícula. Créo por lo mismo que no nos cumple resolver la solicitud del sindico; y creo tambien que la resolucíon del Gobierno es conforme á la ley: si no fuera así, dirijiríamos una representacion para que enmendara la infraccion.

Si nosotros resolvemos la cuestion como he indicado, no se dirá que lo hemos hecho por deferencia al Gobierno, sino porque esa resolucíon es conforme á la ley, pues de lo contrario dirijiríamos la representacion con toda la dignidad é independencia que caracteriza á la comision.

El señor Zarate.

En mi concepto ha incurrido en una equivocacion el H. señor Santisteban. Ha dicho su Señoría que la obligacion del Gobierno era resolver uno de los dos casos que se le presentaban: ó mandar el cumplimiento del artículo 6.º de la ley organica, ó del cuarto de la adicional, porque estos dos artículos se excluian, chocaban entre sí. Parece que he manifestado con bastante claridad que el 6.º no hace mas que sentar las bases, concediendo un elector por cada tantos habitantes, y uno tambien á cada pueblo aunque no tenga ese número de habitantes; y el 4.º prescribe que el Congreso haga esa designacion, señalando el número q' segun su poblacion debe tener cada distrito. El Congreso al ejercer esta atribucion, ha de proceder precisamente partiendo del artículo 6.º. Como el censo de la república ha de hacerse por departamentos, provincias, distritos y pueblos, teniendo por una parte el censo y por otra el artículo 6.º ha de hacer la distribucion, señalando doce al distrito q' tenga seis mil habitantes ó mas de cinco mil ochocientos, dos al pueblo que tenga mil ó mas de ochocientos habitantes, y uno á todo pueblo aunque no tenga 250 habitantes. Llegado el caso de que el Congreso se ocupe del censo, procederá al computo y señalamiento de electores como lo hizo con los diputados, tomando la base constitucional sentada para estos. Hemos visto que el Congreso último no se ocupó del censo porque ni aun estaba hecho; lo que se le presentó fué apenas un extracto ó resumen del censo de cada provincia con espresion de parroquias, en cuya virtud formó el cuadro de diputados; mas para el de electores necesita tener integro el censo. Mientras esto no se verifique los pueblos no pueden alterar el número de electores que tenian en 1853. Por consiguiente, la unica obligacion del Gobierno era mandar lo que mandó, y si se hubiese inclinado á declarar vijente el artículo 6.º cuyo cumplimiento depende esencialmente de la realizacion de la condicion del artículo 4.º habria infringido esta terminante disposicion; porque es claro que para que surta sus efectos el artículo 6.º debe proceder el señalamiento que segun el 4.º debe hacer el Congreso.

La resolucíon del Gobierno con motivo de la consulta que se le dirijió no es aplicable sino á las provincias que se hallen en el caso de la de Celdin. Esta es una provincia de nueva creacion; los pueblos que la componen, pertenecian antes á otra provincia como distritos ó como partes componentes de distritos; esos pueblos que ahora forman una entidad, no podia dar mas que el número de electores que daban en 1853 como distritos ó como partes de distrito. La resolucíon que se ha pedido á

la comision es de distinto genero, y ella tendrá un caracter general aplicable á todos los pueblos de la república.

Tampoco es razon de excusa decir que la resolucíon de la comision importaría poco. Importe poco ó mucho ó nada, la comision debe atender, resolver y fenecer una consulta que se le ha hecho con muy buen fin, con el fin de proceder con acierto.

El señor Santisteban.

Me es necesario hacer una rectificacion sobre un hecho personal. Yo no he dicho una falsedad al asegurar que hay contradiccion entre el artículo 6.º y el 4.º de la ley supletoria. El H. señor Zarate ha padecido una equivocacion, ó ha tomado de un modo incompleto este artículo: el artículo 6.º, dice su Señoría, determina el número de electores que debe dar cada distrito, y el artículo 4.º designa la autoridad que debe hacer la designacion de ese número de electores: por consiguiente, concluye su Señoría, no hay contradiccion. Efectivamente no hay contradiccion bajo ese punto de vista; pero si la hay en otra parte, y muy clara. El artículo 6.º dice: Todo pueblo aunque no tenga 250 habitantes dará un elector y por toda fraccion de 250 habitantes se nombrará tambien un elector; el artículo 4.º dice que el número de electores será el mismo que habia en la eleccion del año 52; es decir que ese derecho de cada pueblo, á tener un elector aun cuando no tenga 250 habitantes, no puede realizarse. Puede haber 20 pueblos que se encuentren en este caso; y como no daban antes electores, no pueden darlos ahora. Aquí está la contradiccion: en que, segun el artículo 6.º, todos los pueblos aun cuando no tengan 250 habitantes, tienen derecho de dar un elector, y ese derecho está suspenso por el artículo 4.º que dispone que mientras no se aprueben los censos por el Congreso, ninguna parroquia aumentará el número de electores. En esto está la contradiccion; por consiguiente, el Gobierno no puede hacer sino una de dos cosas; ó decir que todo pueblo que tuviera 250 habitantes diera un elector, ó bien que esos pueblos se agregaran á los otros para nombrar sus electores, como anteriormente sucedia. Esto es lo que he dicho y creo no haber dicho una falsedad.

El señor Zarate.

Insisto señor en que no hay contradiccion ninguna. El artículo 6.º no solo en la parte que concede un elector á todo pueblo, aunque no tenga 250 habitantes, está en suspenso, sino todo él mientras se cumpla la parte del artículo 4.º que prescribe al Congreso hacer el señalamiento. Suspender, por ahora, transitoriamente una disposicion posterior á otra anterior, para que despues produzca sus efectos con seguridad y mejor orden, no es contradictorio. Si el pueblo que debe dar para la próxima eleccion, es nuevo, posterior al año 1853, no contribuiría todavía con su elector, pero si no es nuevo y en aquel año ya elegia, elegirá tambien ahora adscrito al distrito á que pertenece.

Cerrado el debate fué desechado el dictámen; y en consecuencia, se dió por terminada la cuestion promovida por el alcalde Municipal de la provincia de Chota.

Se levantó la sesion.